



CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES POPULARES EN AMÉRICA LATINA DESAFÍOS INVESTIGATIVOS¹

CITIZENSHIP CONSTRUCTION IN MOVEMENTS AND POPULAR ORGANIZATIONS IN LATIN AMERICA
INVESTIGATIVE CHALLENGES

Alfonso Torres Carrillo²

El problema

Ya se ha vuelto habitual ver en la prensa, en los noticieros de televisión y en las redes de internet, múltiples expresiones de inconformismo colectivo, tanto en los países con economías sólidas como en aquellos con problemas financieros, como el nuestro. Manifestaciones en Wall Street, protestas de trabajadores en Francia, movimientos de indignados en España y Brasil, rebeliones en Túnez y Egipto, movilizaciones indígenas en Bolivia, Ecuador y Colombia, paros campesinos en Colombia, etc. A primera vista, estas acciones disruptivas del orden cotidiano no parecen que tengan que ver con “lo ciudadano”, menos aun cuando se asocian con lo cívico y este con lo civilizado, comúnmente entendido como urbanidad. Incluso, cuando a estos movimientos se les percibe como

Recibido: Mayo 15 de 2015
Aprobado: Julio 15 de 2015



**Universidad
Piloto de Colombia**
UN ESPACIO PARA LA EVOLUCIÓN

-
1. Torres C. A. (2013, septiembre) Conferencia en el Foro Construcción de nuevas ciudadanías: un diálogo de la Universidad con la sociedad. Universidad Piloto de Colombia, Bogotá.
 2. Docente investigador Universidad Pedagógica Nacional.

expresiones de la sociedad civil o en términos de Gaitán del “país nacional”, pareciera que fueran el revés o lo opuesto a lo político.

En esta ponencia argumentaré lo contrario: estas formas de acción colectiva, en particular desde los movimientos sociales organizados y las organizaciones populares, son un escenario privilegiado de la política, de ampliación de la democracia y de la formación de nuevas subjetividades y sujetos políticos o, en los términos que nos convocan, de construcción de ciudadanías activas y de ciudadanos autónomos.

Para respaldar dicha tesis, me apoyaré en algunas investigaciones realizadas recientemente sobre movimientos sociales en América Latina, y mis estudios en particular con dos organizaciones populares de la ciudad de Bogotá: una sistematización de siete experiencias organizativas populares de amplia trayectoria y reconocida presencia en las localidades de Kennedy, Suba, San Cristóbal, Usaquén y Ciudad Bolívar (Torres, 2007) y la caracterización de prácticas y sentidos de la participación local desde las organizaciones populares (Grupo e investigación MGU, 2011).

Movimientos sociales y democracia

A estas diversas formas de protesta, lucha, resistencia, organización y construcción de alternativas frente al poder, protagonizadas por diferentes colectivos sociales, se les ha denominado desde las ciencias sociales como acción colectiva; en sentido estricto, los movimientos sociales son cierto tipo de acción colectiva más o menos permanente, orientada a enfrentar opresiones, desigualdades y exclusiones, protagonizados por sectores amplios de la población que a través de la organización y movilización en torno a sus demandas y sus luchas van elaborando un sistema de creencias y una identidad colectiva, a la vez que generan propuestas y proyectos que modifican estructuras del sistema social (Torres 1997, Archila 1996).

Todo movimiento social se articula en torno a un conflicto social que se expresa como inequidad, explotación, opresión, exclusión o marginación, que afecta a un segmento de la sociedad que, en la medida que lo percibe como una injusticia o un agravio, genera dinámicas asociativas y de movilización para resolverlo y ofrecer propuestas alternativas. Dicha percepción y generación de propuestas se hace tanto desde el sistema de valores, creencias y saberes previos de sus protagonistas, como de la apropiación y construcción de nuevos valores, discursos, conceptos y utopías que le dan sentido e identidad a sus acciones; la acción colectiva se basa en y contribuye a formar marcos interpretativos, puntos de vista y sentidos culturales entre sus actores.

La identidad colectiva es una construcción que va generando el movimiento, en la medida que sus actores reconstruyen o elaboran valores, representaciones y narrativas que configuran un sentido de pertenencia, un “nosotros” que los diferencia de un “los otros”; por ello, la identidad de los movimientos se va rehaciendo y negociando permanentemente en conflicto con las representaciones y acciones que sobre estos ejercen los sectores dominantes. La identidad es correlativa a los lazos de solidaridad que se construyan al interior del movimiento, tanto

en el ámbito cotidiano como en las asociaciones y redes que generen (Torres 1997).

Con lo dicho, los movimientos sociales no pueden ser considerados como una “esencia” unitaria y homogénea, sino como una construcción histórica conflictiva donde confluyen, entre otros, diferentes actores, rationalidades, formas organizativas y de movilización. Los movimientos sociales “empíricos” involucran distintas dimensiones que los estructuran y múltiples posibilidades de desenvolvimiento: desviación, competencia, control, cooptación, aglutinamiento, solidaridades, rupturas y fragmentaciones, entre otros.

Es decir, los movimientos sociales están contribuyendo a formar nuevas subjetividades e identidades políticas que desbordan los límites formales del sistema político: así amplían la noción de lo público y de la democracia asociados a lo estatal. Se trata de lo que algunos llaman “ciudadanías activas” (Lechner 2000), “nuevas ciudadanías” (Dagnino 2001) o, como preferimos nosotros, ciudadanías críticas o ciudadanías alternativas. No buscan tanto integrarse al sistema político sino desbordarlo: se proponen replantearlo en función de nuevos valores y utopías éticas y políticas.

Por otra parte, la creciente intervención estatal en la regulación de diferentes espacios de la vida colectiva a través de las políticas públicas, ha llevado a que los movimientos sociales se politicen en su afán por incidir en esos mismos espacios. Al estabilizarse espacios y procedimientos de negociación en torno a la definición de políticas públicas, el deseo de las organizaciones movilizadas por fortalecer su capacidad de incidencia y su carácter de interlocutores legítimos, los lleva a asumir un papel activo en este ámbito. Es el caso en Colombia de la definición de políticas sobre la mujer, la juventud y la cultura, en las cuales los movimientos buscan estar presentes con sus demandas y propuestas.

Procesos organizativos populares y ciudadanías críticas

Entre otras cuestiones, en el proyecto “Organizaciones populares, identidades locales y ciudadanía en Bogotá” nos preguntamos ¿en qué medida desde estas organizaciones y sus acciones colectivas, los pobladores populares de la ciudad han venido democratizando la política de la ciudad, formando sujetos políticos y posibilitando el surgimiento de nuevos modos de entender y ejercer la ciudadanía?

Entendemos las OPU como espacios de cristalización e institucionalización de formas de solidaridad social presentes en la cotidianidad popular, como nudos del tejido local popular, desde las cuales los pobladores alcanzan un nivel de actores colectivos, con capacidad para ser reconocidos y negociar con otros actores urbanos. No hay que confundir las organizaciones con las acciones que promueven o en las cuales participan; las organizaciones se movilizan de vez en cuando, pero más de estas acciones puntuales permanecen en sus territorios, conformando una dimensión menos visible pero más sólida de la acción colectiva.

Los procesos organizativos populares pueden tener diversos niveles de estabilidad, magnitud y cobertura, desde los grupos en torno a una demanda específica y un ámbito meramente local, hasta las redes y frentes de acción permanentes

con amplia cobertura territorial y capacidad de interlocución con el Estado y los partidos.

El origen de muchos vínculos de solidaridad de los vecinos en los territorios populares, así como el origen de varias experiencias asociativas está relacionado con la organización del modo colectivo de vida urbana; es decir, existen unas condiciones objetivas previas e independientes de la voluntad individual. Esta referencia “estructural” no se agota en el nivel económico pues también se refiere a factores políticos, sociales y culturales que enmarcan la vida y las experiencias sociales de los ciudadanos: sistema político, estructuras urbanas y sociales, procesos culturales e ideológicos nacionales, etc.

Tomo distancia de los estudiosos de movimientos populares que explican su origen y dinámica sólo desde estos factores estructurales. Entre condiciones estructurales y acción organizativa median otras instancias sociales más significativas como son la red de relaciones de sociabilidad (tejido social), la tradición asociativa que poseen los pobladores y la que van generando (tejido asociativo), las coyunturas internas de la evolución del asentamiento, las oleadas generacionales, los tipos de relación establecidas con otros agentes sociales (especialmente el Estado), así como las culturas políticas previas y emergentes entre los pobladores.

Si bien es cierto que él ámbito y el carácter de los procesos organizativos populares es más social que político, ellos definen su identidad desde las opciones políticas que los animan y desde las cuales justifican sus acciones, en particular por su posicionamiento crítico frente al sistema y su propósito de transformación social. Esto lleva a asumir la política como conciencia de historicidad de lo social; es decir, en la “articulación dinámica de sujetos, prácticas y proyectos colectivos, cuyo contenido es la lucha por dar dirección a la realidad en el marco de opciones viables” (Zemelman, 1989: 13).

Más que en su discurso, la riqueza política de las organizaciones está en lo que hacen y en el modo que lo hacen. Así las ideologías que profesan busquen expresarse tanto en sus modos de actuar externo frente al mundo como en sus modos de actuar interno, sus prácticas desbordan los discursos y producen nuevos significados y relaciones de poder. En este sentido, “todo lo que se hace en las organizaciones es político”.

En primer lugar tenemos sus “modos de actuar externo” con otros actores. Iniciamos con el Estado, con el que tienen que relacionarse como garante y responsable de buena parte de las demandas y derechos que reivindican. Las relaciones entre organizaciones populares y entidades estatales han ido de la confrontación o “exigencia” de cumplimiento de “sus obligaciones con la comunidad”, pasando por la participación en algunos de sus programas y espacios de participación local, hasta la cogestión y ejecución de contratos. Ha sido frecuente la confrontación con el Estado en torno a criterios, destinación de recursos, estilos y políticas. También son frecuentes las acciones de presión (cartas, denuncias públicas, movilizaciones y tomas) para obtener algunas conquistas favorables a las poblaciones.

En segundo lugar, están los “modos de actuar interno”; es decir, las prácticas cotidianas más o menos consuetudinarias, en torno a las cuales los integrantes de las organizaciones se van formando en los conocimientos, valores y actitudes que constituyen el saber construido por las organizaciones. Estas prácticas son:

1. Acciones de inserción o “acercamiento” a los sectores poblacionales con quienes se trabajará. Estas prácticas de acercamiento e inserción están relacionadas con los principios de “opción preferencial por los pobres”, con la teología de la liberación, con el compromiso de la educación popular y el trabajo de masas de la izquierda.
2. Acciones encaminadas a acompañar a las poblaciones locales, a “la comunidad”, en sus luchas reivindicativas y en la conquista

de espacios públicos. Se apoya a los habitantes y a las Juntas de Acción Comunal en sus demandas por la instalación o mejora de servicios públicos, o en la solicitud y construcción de parques infantiles, escuelas y centros de salud. En períodos más recientes algunos dirigentes han venido participando en las Juntas de Acción Comunal o en los Consejos Comunales, imprimiéndole el estilo propio de las organizaciones populares.

3. Acciones de conocimiento sistemático de la realidad local. En correspondencia con los criterios políticos de “partir de la realidad”, de “reconocer las necesidades sentidas de la comunidad” y “trabajar desde la realidad del pueblo”, los pioneros, y luego las organizaciones mismas, realizan acciones investigativas sobre la realidad local, sobre las áreas temáticas o sobre las poblaciones con las que se va a trabajar. Es común la realización de diagnósticos, censos e investigaciones sobre la salud, la educación y otras problemáticas y “necesidades” de la gente.
4. Acciones de promoción y creación de espacios y dinámicas asociativas de base, como es el caso de los grupos de mujeres y de jóvenes, los comités de salud y catequesis, los jardines infantiles, las guarderías, los Hogares de Atención, las Asociaciones de Defensa, las bibliotecas y otra variada gama de agrupaciones comunitarias, encaminadas a “mejorar la calidad de vida de los barrios y de la gente”, o a ampliar la participación “comunitaria” en los procesos locales.
5. Acciones de movilización y protesta manifiesta. Aunque fueron más frecuentes en las etapas iniciales de las experiencias, todas las organizaciones han participado o han protagonizado marchas, tomas, concentraciones públicas o paros cívicos para denunciar las necesidades de la población o la injusticia de una medida, o para demandar de las autoridades atención o solución a un problema o necesidad no satisfecha. También es común la participación de las organizaciones en jornadas de movilización amplias como las marchas del Día de los Trabajadores o del Día de la Mujer.
6. Acciones conmemorativas o celebrativas de proyección local. La preocupación por denunciar públicamente agravios e injusticias, así como de anunciar las propuestas alternativas de las organizaciones, se ha institucionalizado en dos casos (AVESOL y CPC) en torno a la realización periódica de carnavales y festivales que canalizan, a través de la expresión lúdica y estética, las insatisfacciones y reclamos de la población, movilizándola en coyunturas determinadas.

7. Acciones explícitamente formativas. La preocupación manifiesta por la “formación de conciencia crítica”, por “elevar el nivel político”, por “formar pensamiento alternativo” o por “cualificar a los miembros”, ha implicado llevar a cabo acciones de formación política y capacitación de los participantes potenciales o efectivos de las organizaciones, especialmente referidas a contenidos políticos y a las áreas temáticas en las que trabajan.

En cuanto a la formación política, es frecuente en las organizaciones aludir a acciones que van desde la realización o asistencia a eventos de análisis de coyuntura, pasando por la invitación de especialistas, la creación de grupos de estudio y espacios de formación política de los colectivos o equipos coordinadores o de las mujeres y los jóvenes con quienes se trabaja, hasta la creación de Escuelas de Formación y Promoción Comunitaria.

Balance: la ciudadanía en movimientos y organizaciones populares

Con lo dicho, ¿cómo interpretar estas prácticas políticas agenciadas desde las organizaciones, desde la ciudadanía? Para Santos (1998), en las sociedades contemporáneas, el desarrollo hipertrofiado de los principios de mercado y de Estado en detrimento del de comunidad ha limitado el desarrollo de la subjetividad y de la ciudadanía. En las democracias liberales esta se ha reducido a las ciudadanías civil y política a nivel individual (derecho al voto), desestimulando o excluyendo otras formas de participación colectiva.

Del mismo modo, la sociedad liberal se caracteriza por una tensión entre la subjetividad individual de los agentes de la sociedad civil y la subjetividad monumental del Estado; vuelven a quedar al margen otras subjetividades comunitarias propias de otros actores colectivos. La igualdad de la ciudadanía liberal choca así con la diferencia de las subjetividades, las cuales resultan creando espacios de encuentro y resistencia, donde surgen formas inéditas de ejercer ciudadanía social y cultural.

Frente a las lógicas hegemónicas del mercado y del Estado, las de identidad, comunidad, subjetividad y ciudadana pueden significar una emancipación de los colectivos subalternos que no se definen por el uno ni el otro, en la medida en que se configuran como sujetos sociales, como movimientos portadores de utopías y proyectos propios, máxime cuando sus protagonistas son los pobladores populares urbanos pues, como hemos señalado antes, sus luchas han sido su modo de acceder a la ciudadanía, a los derechos civiles, políticos y sociales que la ciudad reserva para sus habitantes: son ciudadanos porque han conquistado su derecho a la ciudad (Naranjo, 1999).



En consecuencia, la construcción de la democracia y la ciudadanía, más que un asunto normativo y procedimental, implica generar condiciones que posibiliten la emergencia de subjetividades y actores colectivos con proyectos y utopías con posibilidad de expresarse y realizarse. Estaríamos frente a lo que Lechner (2000) denomina “ciudadanías activas” ya no definidas tanto por su relación con el Estado y el sistema político, sino en la participación activa y crítica en los asuntos de la comunidad, por su presencia en las organizaciones y redes sociales que construyen nuevas institucionalidades, valores y proyectos éticos y políticos.

Cuando las organizaciones exigen no sólo el cumplimiento de la responsabilidad del Estado frente a sus demandas, sino que además presionan

por la ampliación de los canales de participación ciudadana y de sus derechos colectivos, el sentido político de la acción colectiva es más evidente. Así como los movimientos sociales, las organizaciones han sido un factor de democratización y de expansión de ciudadanía. Más aún, han ampliado las nociones de ciudadanía y democracia en la medida en que quienes participan activamente en ellas, construyen una identidad política más amplia que la del ideal liberal del individuo que participa solo en espacios institucionales como las elecciones; es más bien un sujeto que asume un compromiso cívico en su preocupación por los asuntos de su comunidad, se organiza y se moviliza en torno a las demandas y derechos sociales y frente a las políticas o medidas del poder que lo vulneran o que afectan a otros colectivos.

Referencias bibliográficas

- Archila, M (2003). *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 – 1990*. Bogotá: Cinep – Icanh.
- Arditi, B. (1995). La política después de la política. En S. Bolos (comp.) *Actores sociales y demandas urbanas*. México: UIA.
- Dagnino, E. (2001). Cultura, ciudadanía y democracia: los discursos y prácticas cambiantes de la izquierda latinoamericana". En Escobar et al. *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus – Icanh.
- García Canclini, N. (1995). *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México: Grijalbo.
- Lechner, N. (1987). *Cultura política y democratización*. Buenos Aires: CLACSO – FLACSO.
- Naranjo, G. (1999). Formación de ciudad y conformación de ciudadanía. *Revista La Piragua*, 16, 12 - 22 Sistematización de prácticas en América Latina. México: CEAAL.
- Rauber, I. (1995). Actores sociales, luchas reivindicativas y política popular". *Pasos*, 62. 21 – 45 San José de Costa Rica, DEI, San José de Costa Rica.
- Torres, A. (1994). Experiencias organizativas urbanas y constitución de sujetos sociales. *Aportes* 40. Bogotá: Dimensión educativa.
- Zemelman, H. (1989). *De la historia a la política*. México: Siglo XXI - Universidad de las Naciones Unidas.

